

AUTOS 113/2013

En Cartagena, a 18 de Junio de 2013

VISTO por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Social nº 2 de esta ciudad D. Salvador Díaz Molina, el juicio promovido por [REDACTED] que comparece asistida del Letrado D. [REDACTED] frente a la Empresa [REDACTED] S. A., que comparece representada por [REDACTED] y asistida del Letrado [REDACTED] y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL –FOGASA-, que no comparece, en Reclamación de Despido

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha 18 de febrero de 2013 se presentó en el Decanato de los Juzgados de Cartagena demanda suscrita por la parte actora contra la demandada manifestada en la materia referida, que correspondió a este Juzgado de lo Social, y en la que, tras alegarse los hechos y fundamentos legales que estimó procedentes a su derecho, solicitaba se dictase sentencia de conformidad a sus pretensiones.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para su celebración, en su caso del acto del juicio, éste tuvo lugar el día 13 de junio de 2013, compareciendo las partes, como ya se ha dicho. Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda de reclamación de despido, interesando la improcedencia del mismo con los efectos oportunos y la demandada la procedencia, practicándose las pruebas propuestas y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, quedando los autos a la vista para dictar sentencia y todo ello como consta en la grabación efectuada.

TERCERO.- Que en la tramitación de este procedimiento, se han observado las formalidades legales.

II. HECHOS PROBADOS

1º.- La demandante, inició su relación laboral con la empresa demandada el 15 de febrero de 2008 (antigüedad defendida por el trabajador) y ha suscrito con la misma 4 contratos de trabajo a tiempo completo, los dos últimos con referencia a relación laboral especial de personas con discapacidad que trabajen en Centros Especiales de Empleo y los dos primeros no consta esa circunstancia, siendo el último de 5 de febrero de 2009 (antigüedad defendida por la parte demandada) y en todo caso con altas y bajas conforme al documento nº 2 del ramo de prueba de la demandada y que se da aquí por reproducido y en relación al último contrato había terminado la relación anterior el 14 de noviembre de 2008. El último contrato es de obra o servicio determinado y los tres anteriores de interinidad; categoría profesional de la trabajadora de Oficial 3ª y salario mes de 944,86 euros con inclusión de prorrata de pagas extras.

2º.- La trabajadora demandante fue despedida por la empresa mediante escrito el 8 de enero de 2013 y efectos de esa fecha al haber perdido su condición de discapacitada en empresa que es Centro Especial de Empleo, se le reconoce discapacidad del 15 % + 7 puntos de factores sociales complementarios.

3º.- Por resolución referida a contestación a la reclamación previa de 14 de febrero de 2013 se le reconoce un grado de discapacidad de 24 puntos más 7 de factores sociales complementarios.

4º.- La demandante ha interpuesto demanda en impugnación de la anterior resolución que ha recaído en este Juzgado y que está señalado para el próximo 8 de enero de 2014.

5º.- La trabajadora suscribió a la demandada documento denominado “finiquito total de cuentas” de 8 de enero de 2013, que incluye pago de sueldo, pagas de verano, navidad y beneficios y festivos por importe líquido de 375,26 euros.

6º.- La parte demandante no ostenta cargo de representación de los trabajadores o sindical en la empresa.

7º.- Presentada papeleta de conciliación ante el organismo administrativo oportuno, se celebró el acto el 11 de febrero de 2013 con el resultado de SIN AVENENCIA.

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 97.2 de la L.R.J.S., se pone de manifiesto que los hechos declarados probados encuentran su base en la documental aportada por las partes y conforme a reglas de sana e imparcial crítica.

SEGUNDO.- La trabajadora reclama por despido improcedente contra el despido del que ha sido objeto consecuencia de la revisión de la discapacidad que tenía, pasando a discapacidad inferior al 33 % y en base a ello ha perdido su condición de discapacitada y por tanto no puede mantener la relación laboral que era en base a esa circunstancia y en Centro Especial de Empleo según la empresa. Ahora bien y tal como ha quedado de manifiesto la resolución que rebaja el porcentaje de discapacidad hasta el punto de que la actora ha perdido tal condición no es firme, estando previsto el juicio correspondiente para el próximo 14 de enero de 2014 y eso nos lleva a la consideración de que puede recuperar esa calificación de discapacidad de al menos un 33 % y de sancionar el despido llevado a cabo por la demandada, a la hora de recuperar la trabajadora la condición de discapacitada ya no será posible resarcirle de perjuicio creado admitiendo un despido en base a una circunstancia que habría desaparecido.

Es por ello que el despido no va a ser declarado procedente como pretende la demandada pues la facultad de sancionar con el despido que el ordenamiento jurídico confiere a las empresas y que prevé el art. 54 del E.T., no puede ser considerada como absoluta e indiscriminada, sino que ha de reunir los requisitos de forma y causa prevenidos legalmente exart. 55.1 ET. Así el art. 55.4 E.T., declara improcedente el despido cuando el empresario no justifique causa alguna de terminación de la relación laboral que sea imputable al trabajador de forma disciplinaria o que en la forma no se ajustara a lo indicado en el art. 55.1 del ET, lo que se da en el presente caso, ya que se trata de un despido debido a una condición que todavía puede recuperar, al no ser firme la resolución que ha dispuesto la pérdida de la condición de discapacitado y de hecho si consigue de nuevo el porcentaje de discapacidad necesario para tal consideración, 33%, de dar aquí por válido el despido sería por un motivo que no sería tal, por lo que hay que considerar que la empresa debió en su caso esperar a la resolución firme sobre la discapacidad y no siendo tampoco procedente como apuntó la parte actora hacia un despido objetivo por ineptitud sobrevenida. Por consiguiente y como ya se ha dicho, procede la estimación de la demanda y en consecuencia, debe declararse el despido como improcedente, con los efectos previstos en el art. 56.1 E.T., y art. 110 de la LRJS (con la redacción dada por la Ley 3/12 de 6 de julio), correspondiendo a la parte demandada optar en tiempo y forma por el pago a la trabajadora de la indemnización preceptiva a razón de 45/33 días de salario por año de servicios prestados y prorrateándose por meses los periodos inferiores al año con convalidación del acto extintivo a 8 de enero de 2013 o la readmisión al puesto de trabajo en las mismas condiciones anteriores al despido y solo en este último caso procederán los salarios de trámite desde la fecha de efectos del despido y hasta la notificación de esta resolución a la empresa y todo ello –indemnización y salarios de trámite en su caso- calculados sobre el salario acreditado y en el caso de que no haya opción expresa se entenderá que procede la readmisión (art. 56.3 del ET).

Es cuestión controvertida, entre las partes, por un lado, la antigüedad a considerar. Entre trabajadora y empresa se dieron 4 contratos de trabajo, dos de relación especial y los otros dos –los primeros- no. Los tres primeros de interinidad, sin que se haya esgrimido que no respondieran a la finalidad con la que se realizaron y el último de obra o servicio determinado mediando con el anterior, 82 días. No parece que los de interinidad no respondan a otros motivos que los de sustituir a personas con reserva de puesto de trabajo y el último de naturaleza muy distinta y con esa destacada interrupción con el anterior. Es por ello que no se puede hilar un contrato con otro, pues

es evidente la separación entre al menos el último contrato y el anterior, muy superior a la plazo de caducidad del despido y desde luego no se evidencia unidad esencial del vínculo. Por lo que la antigüedad que se va a considerar para el cálculo de la indemnización del despido es la defendida por la empresa, del último contrato, 5 de febrero de 2009. Por otra parte, se alega el finiquito suscrito entre las partes y por el cual incluso se llega a alegar falta de acción. Pues dicho documento hay que interpretarlo en función de lo que se refleja y desde luego es un saldo de cuentas pendientes de salarios y partes proporcionales de pagas a 8 de enero de 2103 y sin que implique mayor liberación respecto a la acción llevada a cabo. Por lo que se reitera la improcedencia del despido con los efectos que se recogen en la parte dispositiva de esta resolución.

TERCERO.- En virtud de lo establecido en el art. 191.1 y 3 a) de la L.R.J.S. (Ley 36/2011 de 10 de octubre), contra la presente sentencia cabe Recurso de Suplicación en razón de la materia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación.

FALLO

Que Estimando la demanda formulada por [REDACTED] frente a la Empresa [REDACTED] S. A., y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL –FOGASA-, debo declarar y declaro IMPROCEDENTE el despido de la parte actora y debo condenar y condeno a la parte empresarial demandada, a que proceda a la opción expresada en tiempo y forma en el plazo de 5 días, desde la notificación de esta resolución, al abono a la trabajadora de la indemnización de 5.290,32 euros con convalidación del acto extintivo a 8 de enero de 2013 o en su caso la readmisión pertinente a su puesto de trabajo y en las mismas condiciones anteriores al despido y con abono solo en este último caso de los salarios de trámite dejados de percibir desde la fecha de efectos del despido 8-1-2013 hasta la notificación de esta resolución a la empresa y a razón del salario día de 31,49 euros, debiendo durante todo este periodo de devengo de salarios de trámite, la empresa condenada mantenerle de alta y cotización en la Seguridad Social y en el caso de que no se optara expresamente, se entiende que procede la readmisión.

Notifíquese la presente resolución a las partes y contra la misma cabe el recurso ya indicado que deberá tramitarse en su caso de acuerdo con lo establecido en la ley procesal laboral vigente desde el 11 de diciembre de 2011 (LRJS), en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, realizando la empresa si es la recurrente el depósito de 300 euros y consignación de las cantidades a que se contrae el fallo de esta resolución en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado en Banesto y liquidación oportuna de las tasas vigentes, esto para cualquiera de las

partes que recurra, conforme a la Ley 10/2012 de 20 de noviembre de 2012 y que entró en vigor el 17 de diciembre de 2012 y con la modificación efectuada por el RDL 3/2013 de 22 de febrero, convalidado tal como consta en el BOE de 21 de marzo de 2013.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Léida y publicada que ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la dicta en su día y celebrando Audiencia Pública por ante mi el Secretario de lo que DOY FE.